

Obsesión por los gigantes tecnológicos, peligros del neoextractivismo y pérdida de soberanía

Por Juan Martín Zanotti (*) y Florencia Guzmán (**)

En sus primeros siete meses de gestión, el presidente Javier Milei mantuvo varias reuniones con los CEOs de las principales compañías tech globales: Google, Meta, X, Open IA. En ellas, no logró compromisos de inversión, y según sus declaraciones públicas, el país está más cerca de comprar los servicios de estos gigantes tecnológicos, que de recibir inversiones. Ante este panorama, Zanotti y Guzmán se preguntan: ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué podría implicar la instalación de estas corporaciones en el país? ¿Qué consecuencias tendría en el mediano y largo plazo?. “Los deseos del presidente por crear un nuevo Silicon Valley hacen sonar alarmas sobre una amenaza a gran escala”, advierten. Un combo que arrastra pérdida de soberanía tecnológica, debilitamiento de la autonomía política, extractivismo de recursos ecológicos y cesión de desarrollos científicos.

En tiempos de discusión de la Ley Bases, y con ella del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI)¹ que otorga beneficios fiscales y aduaneros inéditos para el ingreso de capitales extranjeros, el presidente Javier Milei dejó el país y se reunió con los CEOs de las principales compañías tech globales: Google, Meta, X, Open IA. En sus primeros seis meses de gestión concretó ocho viajes al exterior, de los que se conocen pocos motivos oficiales. La mayoría de las reuniones que mantuvo fueron con empresarios y agenda abierta. En ellas Milei no logró compromisos de inversión, y según sus declaraciones públicas, estamos más cerca de comprar los servicios de los gigantes tecnológicos, que de recibir inversiones. Ante este panorama tenemos motivos para preocuparnos.

¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué podría implicar la instalación de estas corporaciones en el país? ¿Qué consecuencias tendría en el mediano y largo plazo? Los deseos del presidente por crear un nuevo Silicon Valley hacen sonar alarmas sobre una amenaza a gran escala. Un combo que viene con pérdida de soberanía tecnológica, debilitamiento de la autonomía política, extractivismo de recursos ecológicos estratégicos como el Litio y cesión de desarrollos científicos aportados por instituciones que hoy sufren ataques permanentes.

Empresas globales, problemas locales

A finales de mayo en los Estados Unidos, el presidente Milei concretó una gira de fotos y regalos con los CEOs de Google —Sundar Pichai—, Meta —Mark Zuckerberg—, Open IA y X Corp —Elon Musk—. Las corporaciones globales GAFAM por las siglas de estos gigantes, conformadas por Alphabet- Google (+YouTube); Meta (Facebook, +Whatsapp, Instagram); Twitter (X Corp.), Amazon y Microsoft controlan prácticamente todos los eslabones de la cadena de valor de la actual economía digital², desde la infraestructura de distribución y almacenamiento hasta la comercialización de bienes y servicios o la publicidad en redes.

¹ Según el artículo 167, el RIGI es aplicable a las Grandes Inversiones (GI) en proyectos de los sectores de forestoindustrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

² Solo en 2016 los ingresos sumados por las GAFAM superaban los PBI del 88% de los países del mundo —176 países de un total de 196— (Zuazo, 2018).

En la última campaña electoral conocimos el perfil tecnófilo de Javier Milei, su obsesión por las plataformas digitales y su actuación intensa en redes. Del Milei candidato al presidente existe un salto de alarma por las decisiones que el gobierno argentino tomaría para beneficiar a estas corporaciones. Para la fuerza libertaria, emprendedores y tecnólogos serían los motores de la innovación, dentro de un paradigma económico que desresponsabiliza a las empresas de los impactos tecnológicos nocivos y corre al Estado de su rol regulador. No hablamos de cualquier empresa sino de corporaciones predatorias, con un volumen difícil de medir, que no permiten la entrada de competidores y precarizan el trabajo.

¿Qué significa hoy tener el favor de estas corporaciones globales? ¿Quién paga esa cuenta? La apuesta parece ir a fondo, al punto tal que Milei reconoció el 4 de junio que estaría dispuesto a realizar la reforma del Estado que quiere destruir, con un módulo de Inteligencia Artificial de Google.

En El Atlas de la Inteligencia Artificial, Kate Crawford (2022) explica que cada manera de definir la IA cumple con un cometido y establece un marco de referencia para entenderla, medirla, valorarla y gobernarla. La autora insiste que a diferencia de cómo se la nombra, la IA no es artificial ni inteligente, existe como algo corpóreo, hecho de recursos naturales, trabajo, infraestructuras, logística, historias y clasificaciones. Siguiendo a Crawford, subrayamos que los sistemas de IA no son autónomos ni capaces de discernir algo sin entrenamiento humano, ni estructuras políticas que los sostengan, y están diseñados para servir a intereses dominantes. De igual modo que para cualquier política, respecto a la IA debemos preguntar: qué se está optimizando, para qué y quién toma las decisiones.

Las plataformas y sus desarrollos tecnológicos tienen una base material que no se compone a priori o solamente de algoritmos, de allí la necesidad de retomar una agenda académica que enfoque los nuevos materialismos del capitalismo actual. El extractivismo digital es menos digital de lo que parece, se apoya en la explotación humana, de territorios y de los bienes comunes. Nos referimos aquí a una geofísica del poder de la que hablan autores como Jussi Parikka (2021) en su aguda mirada de la relación entre la tecnología y la naturaleza.

Suelo y recursos, el caso del litio

Cuando observamos la comunicación digital desde la visión de los nuevos materialismos vemos cómo en ella se reproducen mecanismos de primarización de una economía que es ávida de minerales. En Argentina los recursos mineros son propiedad de las provincias conducidas por gobernadores que el propio Milei se ha dedicado a agraviar, aunque con la aprobación de la Ley Bases inició una nueva etapa de acercamiento en la relación. La agenda de confrontación y alianzas legislativas se enmarca en la disputa por el uso de recursos estratégicos, su soberanía y explotación. Lo que está a la vista es la ausencia de una planificación estratégica, de un plan nacional de energía, agua y uso de minerales, más aún si pensamos en un gobierno que tiende a desconocer el federalismo y la división de poderes.

Un caso paradigmático aquí es el Litio, mineral escaso que compone gran parte de la base material de los primeros eslabones de la cadena de valor de la economía digital. La importancia central del litio se apoya en sus múltiples usos, el más popular vinculado al almacenamiento y la creación de baterías optimizadas que se extienden a diferentes dispositivos eléctricos y digitales.

Argentina, Chile y Bolivia forman el “triángulo del litio”, la mayor reserva mundial que concentra el 85% de las reservas de este metal blando. Los vértices principales de la creciente del Litio incluyen el Salar del Hombre Muerto entre Catamarca y Salta, el Salar de Atacama en Chile y el Salar de Uyuni en Bolivia. Su extracción intensiva tiene un costo ambiental elevado, entre otros recursos requiere de grandes cantidades de agua, que deja de brindarse a las comunidades donde se produce la explotación, y que a partir de la sanción de la Ley Bases podrá normalizarse como práctica, en tanto se quitan controles de cuidado del ambiente. Una situación que aplica también para otros recursos de nuestra Patagonia.

El litio es un recurso estratégico para nuestra economía y de la región, pero nuevamente como con la IA cabe preguntarnos quiénes se benefician con su explotación en el marco de un sistema de acumulación por desposesión.

El problema del almacenamiento

En el capitalismo de plataformas los datos crecen a velocidad exponencial y con ello también aumenta el problema de dónde y cómo almacenarlos. La respuesta para esto en la era del *big data* fue la creación de *data centers*, enormes edificios llenos de servidores constituyen las granjas de datos.

Su mantenimiento trae aparejado un enorme daño ambiental causado por la demanda desmedida de energía³ y agua que necesita para mantener fríos los servidores. Por dar un ejemplo, el data center que Google quiso instalar en Chile iba a gastar 168 litros de agua por segundo, según la prevención de impacto de la misma empresa, por lo que el proyecto resultó inviable, algo similar sucedió en Uruguay.

En uno de sus últimos viajes a Estados Unidos Milei ofreció al país como el “nuevo polo de inteligencia artificial”. “Estamos proponiendo que Argentina sea uno de los cuatro polos de IA en el mundo”, sostuvo el presidente. “Tenemos a Estados Unidos, que tiene una actitud muy temerosa y, por lo tanto, está transitando en una zona gris no beneficiosa para este tipo de empresas; está el caso de Europa, que está hiper regulado y, por lo tanto, es muy difícil para estas empresas poder desarrollarse; y está el caso de China, que siempre es un elemento de mucha incertidumbre qué es lo que está de fondo”, detalló⁴.

Pese a las recientes experiencias de fracaso en Chile y Uruguay, el gobierno insiste en comprometer extensas tierras en zonas frías, grandes cantidades de agua, energía barata, capital humano y ahora además otorgaría mayores beneficios para extraer minerales estratégicos con gigantes perjuicios para el país.

Final abierto

³ Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que los centros de datos, la IA y las criptomonedas multiplicarán por dos su consumo de electricidad en 2026.

⁴ <https://www.pagina12.com.ar/743146-los-gigantes-tecnologicos-quieren-el-poder>

La historia de internet es la historia de la progresiva privatización de los bienes comunes culturales, dice con lucidez Graham Murdock (2021), agregamos que la privatización también incluye los comunes naturales, que pasan a manos de un puñado de gigantescas corporaciones dueñas de internet y recrean las condiciones para convertir a la red en una herramienta de control social, de precariedad laboral y homogeneización cultural.

El poder de estas plataformas ha reconfigurado hoy el basamento del sistema cultural y amenaza la democracia y lo público, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Ceder recursos estratégicos y capacidades estatales limitará la viabilidad de cualquier proyecto soberano a futuro. Resulta necesario elaborar análisis críticos sobre las estructuras materiales vinculadas a las dinámicas económicas y financieras, pero también re-poner la especificidad de la producción simbólica en la construcción de valor social y democrático. Frente a un modelo neoextractivista se vuelve urgente socializar estas reflexiones y construir regulaciones democráticas para las empresas tecnológicas.

(*) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Becario Posdoctoral del CONICET.

() Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).**

Referencias:

Crawford, K. (2022). *Atlas de IA. Poder, política y costos planetarios*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Parikka, J. (2021). *Una geología de los medios*. Buenos Aires, Caja Negra

Murdock, G., & Martins, H. (2021). The Critical Political Economy of Communications in Critical Times: Interview with Graham Murdock. *Revista Eletrônica Internacional De Economia Política Da Informação Da Comunicação E Da Cultura*, 23(2), 83–97. Recuperado de <https://periodicos.ufs.br/eptic/article/view/16294>

Zuazo, N. (2018). *Guerras de internet*. Buenos Aires, Debate.